

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 3° Juzgado Civil de Viña del Mar
CAUSA ROL	: C-2441-2023
CARATULADO	: I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR/INVERSIONES ISV S.A.	

Viña del Mar, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

Visto:

I.- De la demanda ejecutiva.

En lo principal de la presentación de 1 de junio de 2023, según consta del folio 1 del cuaderno principal, compareció doña María José Corvalán Kameid, abogada, con domicilio en Arlegui N°615, Viña del Mar, en representación de la **Ilustre Municipalidad de Viña del Mar**, corporación de derecho público, representada por su alcaldesa doña Macarena Ripamonti Serrano, funcionaria pública, todos con domicilio en calle Arlegui N°615, Viña del Mar, quien interpuso demanda en juicio ejecutivo contra **Sociedad de Inversiones ISV S.A.**, rol único tributario N° 99.502.530-2, empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don Germán Francisco Miranda Klocker, cuya profesión u oficio expresó ignorar, ambos con domicilio en 4 Norte 1330, Viña del Mar y/o en Villanelo alto 542, Agua Santa, Viña del Mar, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen:

Afirmó que el contribuyente moroso adeuda a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por concepto de patente comercial Rol N° 297690-0, la suma de \$29.594.001, deuda que consta en el certificado cobro ejecutivo N°72, correspondiente a los períodos que en él se indican, suma que comprende reajustes e intereses calculados hasta el 30 de abril de 2023, lo que consta en el mencionado certificado.

Agregó que, conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, el Decreto Ley 3.063 y los certificados de cobro ejecutivo que emite la Secretaría Municipal, en los que consta el concepto y la deuda del contribuyente, tienen mérito ejecutivo, de lo que se desprendería que la obligación contenida en el certificado de cobro ejecutivo corresponde a una obligación líquida, actualmente exigible y cuya acción ejecutiva no está prescrita, procediendo la ejecución en contra del obligado al pago.

En mérito de lo señalado y de conformidad a lo dispuesto en el articulado referido en el Decreto Ley N°3.063, Ley de Rentas Municipales, en el Reglamento dictado en su virtud, y Ordenanza Local de Viña del Mar de Derechos Municipales por Servicios Concesiones y Permisos años 2021, 2022 y 2023, así como lo prescrito en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pidió tener por deducida demanda ejecutiva en contra de Inversiones ISV S.A.,



representada legalmente por don Germán Francisco Miranda Klocker, por la suma de \$29.594.001, ordenar que se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra y se siga adelante la ejecución, hasta hacer entero y cumplido pago a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, de todo lo adeudado, con reajustes, intereses y costas.

II.- De la notificación de la demanda.

Mediante actuación de 26 de febrero de 2024, fue notificado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, don Germán Francisco Miranda Klocker, en representación de Inversiones ISV S.A., según da cuenta el estampe receptorial de doña Guillermina Fuentes Campos, incorporado digitalmente en el cuaderno principal, el 5 de marzo de 2024, según se lee en folio 29.

Consta, también que el 28 de febrero de 2024, fue requerido de pago, en rebeldía, en representación de la ejecutada, según el mérito del estampe receptorial de la ministro de fe actuante.

III.- De las excepciones opuestas por la ejecutada.

En lo principal de la presentación de 29 de febrero de 2024, en folio 31 del cuaderno principal, compareció don Juan Magasich Airola, abogado, con domicilio en calle Reñaca Norte N°25, oficina 1505, Viña del Mar, en representación convencional de Inversiones ISV S.A., persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario N°99.502.530-2, representada legalmente por su gerente don Manuel Rodríguez López ambos domiciliados en calle Cuatro Norte N°1330, Viña del Mar, quien, tras expresar que en la demanda no se indica cómo se determina la suma demandada, ya que no hay ninguna explicación ni fundamentación de ello, opuso las siguientes excepciones:

1. La falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, excepción del N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Justificó esta excepción expresando que, conforme a la demanda ejecutiva y el certificado de deuda, lo que se pretende cobrar es "la contribución de patente municipal" -que no es otra cosa que una clase de tributo- en los términos que contempla el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, que se calcula en base al "Capital Tributario" de la contribuyente, conforme al artículo 24, inciso segundo del Decreto Ley 3063, que en su parte pertinente establece: *"El valor por doce meses de la patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias*



mensuales.”. Que, a su vez, el inciso tercero de dicho artículo señala qué se debe entender por capital propio: “Para los efectos de este artículo se entenderá por capital propio el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, o el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824, de 1974.”. Que el mismo artículo en su inciso final señala: “En la determinación del capital propio a que se refieren los incisos segundo y quinto de este artículo, los contribuyentes podrán deducir aquella parte del mismo que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de patente municipal, lo que deberá acreditarse mediante certificado extendido por la o las municipalidades correspondientes a las comunas en que dichos negocios o empresas se encuentran ubicados. El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este inciso.”.

Expuso que, sobre este tema, nada se dice ni en la demanda, ni en el certificado, por lo cual, no habría forma de conocer cómo se determinan las que calificó de “supuestas” sumas adeudadas. Que en el certificado que se acompaña en la demanda, se indica el periodo, valor neto que se cobra, IPC, Multa y total, pero no se señala cómo se obtiene dichas cantidades.

A continuación, explicó las columnas del cuadro que se contienen en el certificado, señalando que, en primer lugar, está el periodo, que entendemos que el primer número es el año y, el siguiente, después del guion, es el semestre (primer o segundo). Que la segunda columna, “Valor Neto”, sólo indica una cantidad, pero no explica cómo se obtiene. Que en el considerado tercero del Certificado, se indica textualmente que: “El valor señalado fue calculado de conformidad lo (SIC) establecido en el artículo 23 y siguiente del D.L. 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.”. Pero que, nuevamente, no se indica ningún fundamento para esta cifra, que no se sabe cuál sería el capital propio que se habría considerado para el cálculo, y sólo se cita el artículo de la ley, sin ningún fundamento; que ni en la demanda ni en el certificado hay alguna explicación de cómo se llega a la cifra que se pretende cobrar por cada periodo.

Continuó, señalando que en la tercera columna, se indica “IPC”, sin indicación del periodo que cubre y cómo se calcula; que no hay información, solo una cifra. Que en la cuarta columna, titulada “multa”, tampoco hay explicación alguna de qué se trata y cómo se determinan, siendo más grave aún, ya que al ser una “multa” es decir una sanción, no se indica la norma legal que autoriza al municipio para cobrar multa por un supuesto atraso en el pago de la patente



comercial, y que no existe norma legal alguna que autorice al municipio para cobrar multa por el atraso en el pago de la patente comercial y que la quinta y última columna, es la suma de las columnas dos, tres y cuatro.

A partir de lo expresado, afirmó que dicho documento no cumple con los requisitos para que tenga fuerza ejecutiva, por carecer de los elementos básicos para su entendimiento y comprensión, es decir, no es autosuficiente en relación con los elementos de la obligación que se pretendía cobrar; que se trata del documento referido como “Certificado Cobro Ejecutivo N°72”, emitido por el Secretario Municipal, el 26 de abril de 2023; que el documento no presenta ningún tipo de anexo, ninguna referencia a otro documento del cual se puedan obtener los elementos faltantes; que sería claro que el título ejecutivo no menciona todos los elementos de la obligación que se pretende cobrar, y no tiene la información necesaria para deducirlos, en particular, ni la base imponible, ni la tasa, ni el hecho gravado, ni quien habría solicitado la patente comercial. Que, si bien el artículo 47 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales, otorgaría mérito ejecutivo al certificado emitido por el Secretario Municipal, esta situación no exime a dicho funcionario de cumplir con los requisitos generales que la ley exige para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, entre los cuales se contemplan los datos necesarios para que el acreedor conozca la naturaleza del cobro, lo que no se presenta en la especie, debiendo haberse desglosado, por ejemplo, el monto del capital propio, el monto de las tasas a cobrar por cada periodo que se cobran, puesto que es una exigencia legal que el título ejecutivo se baste a sí mismo. Que el título no proporciona la información necesaria que permita a la contribuyente conocer y tener la certeza del monto de la obligación y las bases a la ejecución, siendo deber del ejecutante determinar con claridad en su demanda cuál es el monto adeudado y la base del cálculo para llegar al valor señalado en respectivo título. Nada de lo anterior ha ocurrido.

Insistió en que el Certificado de Cobro Ejecutivo N°72 no proporciona los antecedentes ni la base de cálculo utilizada para arribar a los valores que señala, que no se especifica o detalla cuál es el capital propio o tributario de su representada, y sus eventuales rebajas conforme al inciso final del artículo 24 del DL 3.063, ni qué se ha considerado como base imponible para cada período, por lo que no se sabe si se aplicó o no la rebaja al capital propio que establece la norma citada, porque nada dice el certificado.

Acusó, además, que, incluir un ítem de “Multa”, es derechamente ilegal, porque el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, textualmente establece: *“El contribuyente que se constituyere en mora de pagar las prestaciones señaladas en el artículo anterior, quedará obligado, además, al pago de los reajustes e*



intereses en la forma y condiciones establecidas en los artículos 53, 54 y 55 del Código Tributario". Que estas últimas normas hablan de reajustes e interés, pero no de multa, que es una sanción que debe estar expresamente indicada en la ley, y que en el presente caso no hay norma que establezca una "multa" como pretende cobrar la ejecutante.

Agregó que el artículo 47 de la misma ley expresa el vocablo "acreditar" que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, acreditar es: "Hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad" (primera acepción); "Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece" (tercera acepción). Que, de dichas acepciones, se concluye que, para acreditar, no basta con señalar o decir algo, sino que necesariamente se debe fundamentar o explicar para que tenga certeza y/o de seguridad, y que en el Certificado nada de eso ocurre, pues sólo se limita a señalar cantidades, sin ningún fundamento o explicación, por lo cual, no lo hace digno de crédito, como lo exige la primera acepción, ni tampoco da seguridad, como lo señala la tercera acepción, de modo que el Certificado no acredita nada y carecería de los elementos esenciales de certeza que exige nuestra legislación para tener fuerza ejecutiva, al no mencionar todos los elementos de la obligación que se pretende cobrar, ni la información necesaria para deducirlos, esto es la base imponible, la tasa, el hecho gravado, y quién habría solicitado la patente comercial.

Por último, en apoyo de sus argumentos, citó jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y reiteró que el título ejecutivo debe ser autosuficiente, lo que en el presente caso no ocurriría, configurándose de esta manera la excepción opuesta.

2. La excepción de prescripción de la acción ejecutiva, contenida en el artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil.

Manifestó oponer esta excepción respecto de todos los impuestos municipales que se hayan hecho exigibles hace más de tres años, contados desde la notificación de la demanda, haciendo presente que la prescripción es una institución que garantiza la estabilidad y certeza en el tráfico, valor esencial para un ordenamiento jurídico seguro, y que, ni siquiera el ejecutante puede omitir que una parte de la que nuevamente calificó de "supuesta" deuda que se cobra, está prescrita, siendo ésta, la de los periodos al segundo semestre de 2020 y al primer semestre de 2021.

Tras reproducir jurisprudencia de las Illmas. Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, e insistir en los periodos cuya prescripción alega, en mérito de lo expuesto y de lo prescrito en los artículos 464 y demás disposiciones legales pertinentes del Código de Procedimiento Civil, artículo 200 y siguientes del Código Tributario, artículos 23, 24, 47 y 48 de la Ley de Rentas Municipales,



artículo 2.521 del Código Civil y demás disposiciones pertinentes, pidió tener por opuestas las excepciones señaladas contra la totalidad de los cobros que se intentan, declararlas admisibles y en definitiva, acoger una o más de las excepciones opuestas, con expresa condena en costas.

IV.- Del traslado de las excepciones.

En su presentación de 8 de marzo de 2024, que obra en folio 35, la ejecutante evacuó el traslado que le fuera conferido, solicitando el rechazo de las excepciones opuestas, según las siguientes consideraciones:

De la excepción de falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, pidió su rechazo y, aseveró que el título cumple con todos los requisitos que exige la ley a la luz de la norma del artículo 47 del Decreto Ley 2385, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y citó también jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema

En cuanto a alegación de prescripción, expresó que, siendo una materia que corresponde al juez privativamente, así como sus requisitos de procedencia, de acogerse la prescripción, pidió que se circunscriba al período alegado de contrario correspondiente al segundo semestre de 2020.

Finalizó solicitando tener por evacuado el traslado y negar lugar a las excepciones opuestas a la ejecución y, en caso de acoger la excepción de prescripción, limitar la declaración de prescripción al período alegado de contrario correspondiente al segundo semestre del año 2020, debiendo continuar la ejecución por los períodos no prescritos, con costas.

V.- De la resolución que recibió las excepciones a prueba.

Por resolución de 13 de marzo de 2024, según se lee en folio 36 del cuaderno principal, se tuvo por evacuado el traslado de la parte ejecutante, se declaró admisibles las excepciones y se las recibió a prueba por el término legal, fijándose como hechos pertinentes, substanciales y controvertidos, los siguientes:

1.- Efectividad de carecer el título fundante de la presente ejecución, de alguno de los requisitos establecidos por las leyes para que tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea en relación al demandado.

2.- Efectividad de encontrarse prescrita la deuda y/o la acción ejecutiva deducida en autos. Hechos y antecedentes que darían cuenta de la prescripción alegada.

VI.- De la notificación de la resolución que recibió las excepciones a prueba.



Cabe señalar que por resolución de 15 de marzo de 2024, se tuvo por notificada la interlocutoria de prueba a la ejecutante, en virtud de su solicitud en tal sentido.

Por su parte, a la ejecutada se la tuvo por notificada de la interlocutoria de prueba en la misma fecha de su dictación, por el estado diario, en virtud de haberse aplicado a su respecto lo dispuesto en el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil mediante resolución de 6 de marzo de 2024, que obra en folio 34.

VII.- De la prueba rendida por las partes.

Tal como consta del mérito de autos, ninguna de las partes allegó medios probatorios al presente juicio.

VIII.- De la citación a las partes a oír sentencia.

Por resolución de 18 de junio 2024, según se lee en folio 54 del cuaderno principal, atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 469 del Código de Procedimiento Civil, se citó a las partes para oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que en lo que guarda relación con la excepción de falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, que establece el numeral 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que el certificado que sirve de base a la presente ejecución no se basta a sí mismo, dado que no contiene información respecto a cómo se calculan las sumas supuestamente adeudadas y a que no da cuenta de una obligación líquida, se tendrá presente -para su rechazo- en primer lugar, que el mero examen visual del título permite establecer que éste sí cumple con los requisitos establecidos por el legislador para que tenga fuerza ejecutiva; y, en segundo lugar, que las causales de impugnación no fueron debidamente probadas por la ejecutada, no obstante corresponde la carga procesal probatoria en ese sentido, a la luz de lo que dispone el artículo 1698 del Código Civil.

Efectivamente, el título ejecutivo que sirvió de base a la presente ejecución, denominado “certificado cobro ejecutivo N° 72”, aparece suscrito y firmado por el secretario municipal de la municipalidad de Viña del Mar; y en él se indican los períodos de patentes comerciales que adeudaría la sociedad demandada, el valor de la misma y el reajuste y multa que también se aplican a ella, de modo que, además de contener una obligación absolutamente líquida, el título cumple con lo que previene el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, que dispone que *“Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el*



secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil”.

A mayor abundamiento, el mismo certificado expresa lo siguiente: “2. Los valores adeudados indicados precedentemente incluyen reajustes e intereses calculados hasta el 30 de abril de 2023, de conformidad a lo previsto en los Art. 53 del Código Tributario y 48 del D.L. 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales. Ello, sin perjuicio del reajuste e intereses que correspondan hasta el pago total de la deuda. 3. El valor neto señalado fue calculado de conformidad lo establecido en el artículo 23 y siguientes del D.L. 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales”; de modo que se expresa, en exceso y con detalle, la forma en que se aplicaron los reajustes e intereses, a más del valor neto que constituye la obligación.

Por estas consideraciones, se desestimaré la excepción en análisis, tal como se dirá en la conclusión del presente fallo.

Segundo: Que, seguidamente, en lo que respecta a la excepción de prescripción deducida por la sociedad ejecutada, se tendrá en consideración que el inciso primero del artículo 29 del Decreto N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, establece que “*El valor fijado conforme al artículo 24 corresponde a la patente de doce meses comprendidos entre el 1° de julio del año de la declaración y el 30 de junio del año siguiente*”. Luego, el inciso tercero de la misma norma, establece que “*La patente se podrá pagar al contado o en dos cuotas iguales, en la municipalidad respectiva, dentro de los meses de julio y enero de cada año*”.

Ahora bien, la petición de prescripción recae sobre las partes correspondientes al segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021.

Luego, la patente que corresponde al segundo semestre de 2020, debía ser pagada hasta el 31 de enero de 2021; y la que corresponde al primer semestre de 2021, debía ser pagada hasta el 31 de julio de 2021.

Así las cosas, constando en autos que la notificación de la demanda se efectuó el 26 de febrero de 2024 -produciéndose la interrupción de la prescripción- es posible establecer que solo la acción para exigir el cobro de la patente correspondiente al segundo semestre de 2020 se encuentra prescrita, mas no la que corresponde al primer semestre de 2021, en razón de no haber transcurrido el plazo de 3 años que establece el legislador y, en consecuencia, la excepción de prescripción será parcialmente acogida, tal como se declarará en la parte resolutive de esta sentencia.



Tercero: Que en lo que dice relación con el pago de las costas, se estará a lo que previene el artículo 471 del Código de Procedimiento Civil y, habida consideración que se acogerá parcialmente una de las excepciones deducidas, se declarará que las partes deberán concurrir proporcionalmente, en partes iguales, al pago de las costas procesales; y que cada parte pagará sus propias costas personales.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1467 y 1698 del Código Civil; en las normas pertinentes del Decreto Ley N° 3063; y en los artículos 160, 170 y siguientes, 464 números 7 y 17, y 471, todos estos últimos, del Código de Procedimiento Civil; se declara:

I.- Que se acoge parcialmente la excepción de prescripción deducida en lo principal de la presentación de folio 31, datada el 29 de febrero de 2024, por el abogado don Juan Magasich Airola, en representación de **Inversiones ISV S.A.**, representada legalmente por don Manuel Rodríguez López, contra la ejecución iniciada en folio 1, el 1 de junio de 2023, por la abogada doña María José Corvalán Kameid, en representación de la **Ilustre Municipalidad de Viña del Mar**, representada por su alcaldesa, doña Macarena Ripamonti Serrano, todos debidamente individualizados en estos autos; solo en cuanto se declara prescrita la acción de cobro de la patente comercial correspondiente al segundo semestre de 2020, debiendo continuarse la ejecución para el cobro de las restantes patentes, que comprenden desde el primer semestre de 2021 al primer semestre de 2023, hasta que la ejecutada haga entero y cumplido pago a la ejecutante de los montos que ellas comprenden, más reajustes e intereses

II.- Que se rechaza la excepción de falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, que fue deducida en lo principal de la presentación de folio 31, datada el 29 de febrero de 2024, por el abogado don Juan Magasich Airola, en representación de **Inversiones ISV S.A.**, representada legalmente por don Manuel Rodríguez López, contra la ejecución iniciada en folio 1, el 1 de junio de 2023, por la abogada doña María José Corvalán Kameid, en representación de la **Ilustre Municipalidad de Viña del Mar**, representada por su alcaldesa, doña Macarena Ripamonti Serrano, todos debidamente individualizados en estos autos.

III.- Que cada parte deberá concurrir al pago proporcional, en partes iguales, de las costas procesales; y que cada parte deberá pagar sus propias costas personales.

Notifíquese a la apoderada de la ejecutante, personalmente o por cédula; y, al apoderado de la ejecutada en la forma prescrita por el artículo 50 del Código de



C-2441-2023

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 53 del mismo cuerpo legal, con el mérito de la resolución que se lee en folio 34.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Dictada en los autos Rol C-2441-2023 por **Esteban Andrés Gómez Barahona**, juez del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Viña del Mar, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXTMXXHXXH